



Doctor

LUIS EDUARDO CARDOZO CARRASCO

JUZGADO TREINTA Y SEIS (36) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.- SECCION TERCERA

E. S. D.

RADICADO No.:	110013336036-2023-00271-00
DEMANDANTE:	JORGE ALBERTO BARRERA PINEDA
DEMANDADOS:	DISTRITO CAPITAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL Y OTRO.
PROCESO:	REPARACIÓN DIRECTA.
ASUNTO:	RECURSO DE REPOSICIÓN EN CONTRA DEL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

JORGE EDUARDO VALDERRAMA BELTRÁN, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 93.402.253 de Ibagué y tarjeta profesional No. 112.686 del C.S. de la Judicatura, en mi calidad de apoderado del **DISTRITO CAPITAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL**, por medio del presente escrito, en oportunidad me permito presentar **RECURSO DE REPOSICIÓN** en contra del auto de fecha 11 de septiembre de 2023 proferido por su despacho y notificado personalmente el día 09 de octubre de 2023 dentro del proceso de la referencia.

Es importante precisar al despacho que el recurso se fundamenta en las siguientes premisas jurídicas:

1. Los hechos no son claros y precisos, para poder identificar cuál es el presunto daño antijurídico que le adjudica a mi representada, y cuándo supuestamente se materializó, máxime que el sustento de sus pretensiones económicas (pago de unos honorarios) versa sobre un contrato de prestación de servicios del cual no es parte la Entidad Estatal (asunto por demás contractual). Es decir no es claro, cuál es el hecho, o la operación administrativa de mi representada que lo legítima para acudir al medio de control relativo a la responsabilidad extracontractual del Estado.
2. No se acredita la legitimación por activa, el actor no precisa, por qué está legitimado para reclamar perjuicios de un asunto eminentemente contractual estatal (proceso contractual sancionatorio). Ciertamente, el actor no es parte en el contrato estatal, la póliza de cumplimiento del contrato no ampara perjuicios por honorarios de terceros. Es decir, nada tiene que ver que la entidad declare el incumplimiento con la pretensión económica del actor. La póliza de cumplimiento de un contrato, ampara el riesgo de incumplimiento de obligaciones de un contrato, y si ello ocurre, el único legitimado para reclamar perjuicios, es la entidad contratante, por aquellos perjuicios que directamente le cause el incumplimiento de su contratista. En otra palabras, nada tiene que ver, el reclamo del demandante, con los perjuicios directos que pueda reclamar mi representada a la aseguradora luego de declarar el siniestro de incumplimiento contractual.





3. No se cumple con lo establecido en el numeral 8 del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta que no se encuentra acreditado que el demandante haya enviado copia de la demanda y sus anexos a mi representada simultáneamente con la presentación de la demanda.

Para acreditar lo anterior, procedo a presentar los antecedentes del caso, y a realizar una desconstrucción de lo dicho en los hechos de la demanda:

- a. Frente a los hechos de la demanda, que son los mismos de la solicitud de conciliación el demandante dice lo siguiente:

En los hechos primero al cuarto el demandante efectúa una presentación del Convenio de Asociación celebrado entre la Secretaría Distrital de Integración Social y la ONG FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL (en adelante FUNDESA), señalando su objeto, plazo de ejecución y menciona la cláusula octava del contrato indicando que esta protege *“los intereses y el patrimonio de la entidad frente a posibles incumplimientos del contrato por parte de FUNDESA”*

Es decir, presenta un hecho fáctico eminentemente contractual.

En el mismo sentido, en los hechos quinto y sexto hace referencia a las pólizas de cumplimiento que se constituyeron en el marco del convenio de asociación.

Presenta un hecho fáctico eminentemente contractual. Como lo señale antes, no son claro los hechos, frente a la pretensión principal, pues, la imposición de una sanción contractual por incumplimiento contractual, no cobija el pago de los honorarios para colaboradores del asociado Fundesa. De hecho, la ONG ya fue sancionada, y lo reclamado son los perjuicios directos de mi representada por la naturaleza de la póliza. Por eso, para poder ejercer adecuadamente la defensa de mi representada, no es claro, cuál es el supuesto daño antijurídico, causado extracontractualmente. Y mucho menos cuál es la legitimación por activa, con relación al proceso sancionatorio que se le adelantó a FUNDESA.

En los hechos noveno al veinticuatro el demandante se refiere a la relación contractual que el demandante tiene con FUNDESA, señalando la existencia del contrato de prestación de servicios No. CD-BG-031-22., y lo acontecido durante el desarrollo de este.

Hechos de una relación privada, y de naturaleza contractual.

Frente a las supuestos omisiones, hechos contenidos del numeral veinticinco al cuarenta y cinco, el demandante precisa lo siguiente:

- Que la supuesta omisión de la entidad deviene en un primer momento de adelantar el proceso sancionatorio en contra del asociado FUNDESA. **¿Qué tiene que ver esto, con el perjuicio que reclama, que legitimación tiene, si no es parte en dicho contrato estatal, ni tampoco lo que reclama se puede definir en el proceso**





sancionatorio contractual? Además, se reitera ello es un asunto eminentemente contractual.

- Indica que para la fecha de radicación del trámite conciliatorio no se había emitido un acto administrativo declarando el incumplimiento de FUNDESA. **¿Se reitera, cuál es la legitimación o el daño, si el proceso sancionatorio es una facultada contractual de mi representada, en el cual no se reclama, ni se define, lo que pretende el demandante como pretensión?** Ello es un proceso administrativo para definir si el contratista FUNDESA incumplió, y conforme a ello, se reclaman directamente los perjuicios causados a la parte contratante. (la póliza de cumplimiento de un contrato, no ampara riesgos relativos a los hechos que aduce el demandante). **Por lo anterior, no se entiende cuál es el daño antijurídico que le endilga a mi representada.**
- Menciona la existencia de responsabilidad solidaria de FUNDESA como de la SDIS por los supuestos daños de índole económico que se causaron al demandante. **La solidad que alega es un tema de naturaleza laboral, que además deviene de un debate contractual, por lo cual no es claro, cuál es el debate desde lo extracontractual.**
- A posteriori menciona que la SDIS desarrollo el proceso de incumplimiento del cual el demandante no tuvo conocimiento, adicionalmente alega que resolución *"no abarcó los rublos correspondientes a los honorarios causados y perseguidos por esta demanda"*

De lo anterior deja claro, que lo que discute es un asunto contractual, pero no precisa, cuál es la legitimación por activa, y cuál daño antijurídico se le causó frente a un proceso sancionatorio **contractual del cual no tenía porque ser parte, y tampoco explica de manera clara y precisa, por qué los rubros que reclama debieron ser incluidos.**

Nótese su señoría como en ningún momento, es claro, respecto a la imputación fáctica y jurídica, en el terreno de lo extracontractual, pues, todo lo sustenta en lo contractual, sin que explique cuál es la legitimación POR activa, respecto al proceso sancionatorio que se le adelantó a FUNDESA.

b. CONCLUSIONES:

1. No se acredita la legitimación en la causa por activa. Ahora bien, si lo que realmente se alega como daño antijuridico, es lo acontecido con el proceso administrativo sancionatorio (lo que no se desarrolla, además de ser un asunto contractual) téngase en cuenta que el demandante no tiene ningún tipo de relación o interés con dicho proceso, vale la pena recordar en primer lugar que el demandante no es parte del convenio de asociación celebrado entre FUNDESA y la SDIS, segundo que los procesos sancionatorios no se adelantan para que la entidad haga reconocimientos a terceros sino para declarar el incumplimiento del objeto contractual y afectar las pólizas de cumplimiento que cubrirán los perjuicios causados directamente al contratante.





2. El demandante solicita como perjuicio el reconocimiento y pago de un valor contractual (honorarios), de cuyo contrato no es parte mi representada, y en gracia en discusión, ni siquiera precisa por qué le adjudica el no pago por parte de su contratante, a mi representada.
3. Tampoco el juez administrativo puede declarar la solidaridad por un asunto contractual privado.

Respecto del requisito contenido en el numeral 8 del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, se evidencia que una vez revisado el correo de notificaciones de la Entidad, no se encuentra acreditado que el demandante haya enviado copia de la demanda y sus anexos a mi representada simultáneamente con la presentación de la demanda. Por lo anterior, la demanda no podía ser objeto de admisión porque dicho requisito no se encontraba debidamente acreditado.

4. En atención a lo expuesto si el despacho considera que el daño antijurídico versa sobre el proceso administrativo sancionatorio, previo a darle el trámite correspondiente a la demanda, resulta necesario advertir al despacho que es necesario que el actor precise cuál es la legitimación que le asiste a este derivado de un proceso sancionatorio por incumplimiento contractual, para efectos de hacer efectiva una póliza cumplimiento contractual, para que así mi representada pueda tener claro cuáles son las excepciones que podría formular.

Su señoría no se trata simplemente de acceso a la justicia, sino que los demandantes cumplan con la carga que les corresponde, para permitir adelantar el proceso con certezas, por lo menos, sobre lo que se alega como daño antijurídico, porque su atribución al Estado, la legitimación por activa del actor, y por qué es procedente adelantarlos como una reparación directa. Ello permite una adecuada labor de la justicia y un ejercicio adecuado del derecho de defensa y contradicción.

PETICIÓN.

Que se revoque el auto de fecha 11 de septiembre de 2023 proferido por su despacho y notificado personalmente el día 09 de octubre de 2023, mediante el cual se admitió la demanda de la referencia.

Con el acostumbrado respeto,

JORGE EDUARDO VALDERRAMA BELTRÁN

C.C. No. 93.402.253 de Ibagué- Tolima

T.P. No. 112.686 del C. S. de la J.

